

REPÚBLICA DOMINICANA
INFORME DE DERECHOS HUMANOS 2016

RESUMEN EJECUTIVO

La República Dominicana es una democracia constitucional representativa. En mayo los electores eligieron a Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como Presidente por un segundo mandato de cuatro años. Observadores externos imparciales indicaron que las elecciones fueron, en términos generales, libres y ordenadas, a pesar de los fracasos presentados en la introducción de un nuevo sistema de votación electrónica. Las autoridades civiles en ocasiones no mantuvieron un control efectivo de la seguridad.

El problema más grave de los derechos humanos fue la discriminación generalizada contra los migrantes haitianos y sus descendientes. En el 2013, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia declarando que los dominicanos descendientes de indocumentados, la mayoría de los cuales eran de ascendencia haitiana, no tenían derecho a la ciudadanía y de manera retroactiva revocaron su ciudadanía. La ley de naturalización, promulgada en el 2014, ayudó a restaurar los derechos ciudadanos de muchos de los afectados, aunque la mayoría aún no tenían sus documentos de nacionalidad al final del año.

Otros problemas de derechos humanos incluyeron ejecuciones extrajudiciales por parte de los organismos de seguridad, condiciones de sobrepoblación y de peligrosidad en las prisiones, detenciones arbitrarias y la detención preventiva prolongada, debilidad del Estado de Derecho, e impunidad de la corrupción. También hubo reportes de violencia crónica contra las mujeres, incluyendo violencia intrafamiliar, violación y feminicidio; la trata de personas y discriminación contra las personas basada en la orientación sexual o la identidad de género; y la aplicación inadecuada de las leyes laborales.

El gobierno tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero hubo informes generalizados de impunidad oficial y corrupción, especialmente en lo que respecta a los funcionarios de rango superior.

Sección 1. Respeto a la Integridad de la Persona, Incluyendo la Libertad de:

a. Privación arbitraria de la vida y otros motivos ilícitos o asesinatos políticamente motivados

Hubo numerosos informes según los cuales el gobierno o sus agentes cometieron asesinatos ilegales o arbitrarios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportaron más de 180 ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía hasta el mes de septiembre. La Procuraduría General de la República informó de 74 ejecuciones extrajudiciales al mes

de junio. La violencia relacionada con las elecciones nacionales de 2016 produjeron seis muertes, pero no hubo informes de que agentes gubernamentales o las fuerzas de seguridad estuvieran involucradas en actos de violencia. Antes de las elecciones, el 11 de marzo, un conflicto interno dentro de un partido resultó en la muerte de un hombre. Las autoridades detuvieron al presunto autor quien, al mes de noviembre, se mantenía en prisión en espera de juicio. El Procurador General alegó que el incidente surgió por una disputa sobre la selección de los candidatos de dicho partido para el Congreso.

b. Desapariciones

En el transcurso del año no hubo denuncias de desapariciones por motivos políticos. El Comité Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que estaba investigando seis casos de desaparecidos no resueltos de activistas de los derechos humanos que ocurrieron entre 2009 y 2014, y que entendían que dichas desapariciones fueron políticamente motivadas.

c. Tortura y otras acciones crueles, inhumanas, tratamiento degradante o castigo

Aunque la ley prohíbe la tortura, las palizas y el abuso físico de los detenidos y de los presos, hubo reportes que miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente miembros de la Policía, llevaron a cabo dichas prácticas. La ley prevé penas de entre 10 y 20 años de prisión por tortura y maltrato físico, y penas de hasta 30 años para casos agravados.

El CNDH informó que la policía utilizó diversas formas de abuso físico y mental para obtener confesiones de los sospechosos detenidos. Según la CNDH los métodos utilizados para extraer las confesiones incluían asfixia, cubrir las cabezas con bolsas de plástico, golpearlos con palos de escoba, obligándolos a permanecer de pie durante la noche y golpeándolos en los oídos con los puños enguantados o con relleno de muebles para no dejar marcas. La Procuraduría General de la República declaró que no recibió denuncias formales de torturas durante el año. En agosto, la Oficina del Procurador General instruyó, de manera oficial, a los fiscales a que monitorearan el tratamiento dado a los prisioneros y las denuncias de tortura.

Condiciones del Centro Penitenciario y de Detención

Las condiciones en las prisiones van desde el cumplimiento de las normas internacionales en las cárceles “modelo” o en los centros de rehabilitación correccional (CRC) a aquellos espacios que carecen de las condiciones adecuadas y de atenciones médicas en las cárceles “tradicionales”. Las amenazas para la vida y la salud incluyen las enfermedades contagiosas, saneamiento deficiente, pobre acceso a los servicios de salud, falta de guardias penitenciarios bien entrenados, y los ataques realizados por los prisioneros contra otros

reclusos. Estos problemas se agravaron en las prisiones tradicionales, las cuales estaban seriamente sobrepobladas.

Condiciones Físicas: La sobrepoblación extrema fue un problema en las cárceles tradicionales. El CNDH reportó que en promedio había unos 15,000 prisioneros en las cárceles tradicionales y 10,000 en los CRC, un promedio constante durante los últimos años ya que las prisiones tradicionales no han sido retiradas. En La Victoria, la más antigua de las prisiones tradicionales, tenía una población de 8,000 prisioneros, a pesar de que fue diseñada para alojar un máximo de 2,500. La cárcel de la Romana fue la única prisión donde las facilidades para los hombres y las mujeres estaban separadas, pero contiguas.

Los prisioneros policiales y militares recibieron un tratamiento preferencial, así como aquellos con mejores condiciones económicas quienes pudieron alquilar camas preferenciales y adquirir otras necesidades.

Según la Dirección de Prisiones, un personal militar y policial tenía a su cargo la custodia de las cárceles tradicionales, mientras que un cuerpo especializado de la policía penitenciaria tenía a su cargo la seguridad de los CRC. Los informes de maltrato y de violencia en prisiones fueron comunes, así como los informes de hostigamiento, extorsión y chequeos inapropiados de los visitantes a las cárceles. Algunas prisiones quedaban fuera del control efectivo de las autoridades, y hubo acusaciones de tráfico de drogas y armas, prostitución y de abuso sexual dentro de los recintos carcelarios. Los alcaides de las cárceles tradicionales con frecuencia controlaban sólo el perímetro carcelario, mientras que los internos controlaban, con sus propias reglas y su propio sistema de justicia. La Oficina del Procurador General de la República reportó que recibió 15 quejas de abusos cometidos en las cárceles donde determinó que cuatro eran creíbles y fueron sancionadas.

Aunque la ley determina la separación de prisioneros, según la severidad de los crímenes cometidos, las autoridades no tenían la capacidad para implementar dichas leyes. Según estimados del año 2014 de la Dirección de Prisiones, el 62% de los internos en La Victoria, la prisión tradicional más grande del país, eran prisioneros preventivos en espera de sus juicios. El CNDH reportó que algunos internos permanecieron en detención preventiva hasta unos tres años. La Oficina Nacional de Defensoría Pública reportó la presentación de 788 mociones al mes de octubre para aliviar la situación de los presos preventivos. Las condiciones sanitarias y de salud eran, en términos generales, muy pobres. Los prisioneros dormían generalmente en el piso por la escasez de camas. El personal de las prisiones no separó a los internos enfermos del resto de la población. Todas las prisiones contaban con dispensarios médicos, aunque la mayoría de dichos dispensarios no cumplieron con las necesidades de la población interna. En las prisiones tradicionales los internos tenían que adquirir sus propios medicamentos o depender de sus familiares u otras personas para recibir los medicamentos. La mayoría de las muertes reportadas fueron provocadas por

enfermedades. Desde fines de febrero al mes de marzo, se reportó un brote de cólera en La Victoria, dando como resultado 75 diagnósticos positivos y provocando cuatro muertes. El Programa Nacional de Control de la Tuberculosis reportó que el Ministerio de Salud, conjuntamente con la Procuraduría General de la República y la Dirección de Prisiones establecieron un programa para controlar la tuberculosis en las 32 prisiones del país.

Según la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y Sida, el dos por ciento de la población interna era VIH positivo. La Dirección reportó que todas las prisiones del sistema ofrecían pruebas para detectar el VIH/SIDA, así como tratamiento y servicios de consejería. Según la Dirección de Prisiones, todas las prisiones ofrecían tratamiento para el VIH/SIDA, aunque el CNDH indicó que mientras los CRC sí ofrecían estos tratamientos, ninguna de las prisiones tradicionales estaba preparada para ofrecer dichos servicios y tratamientos. En el caso de los CRC, algunos prisioneros con discapacidad mental recibieron tratamiento, incluyendo terapia, para tratar sus condiciones. El gobierno no ofreció servicios a los prisioneros con problemas mentales en las cárceles tradicionales. Ni los CRC ni las prisiones tradicionales ofrecieron facilidades para las personas con discapacidades.

Administración: El mantenimiento de los archivos en las prisiones era inadecuado. Los defensores públicos ofrecieron servicios legales a los prisioneros y, en algunos casos, les brindaron asistencia con ciertas quejas.

Monitoreo Independiente: El gobierno permitió las visitas y el monitoreo de organizaciones no gubernamentales (ONGs) económicamente independientes, así como de medios de comunicación. El director del CNDH fungió como defensor de los internos. El CNDH, la Oficina Nacional de Defensoría Pública, la Oficina del Procurador General de la República y la administración de los CRC conformaron comités de derechos humanos en cada CRC, y lograron obtener derecho a visitas sorpresas en cada CRC. Los comités ejercieron este derecho, incluyendo una visita en junio a La Victoria. Los prisioneros pudieron presentar sus quejas tanto verbalmente como por escrito a los comités de los derechos humanos, y en la mayoría de los casos plantearon sus quejas a través de miembros de sus familias, abogados o defensores de los derechos humanos.

d. Arresto Arbitrario o Detención

La Constitución prohíbe la detención sin una orden judicial a menos que las autoridades detengan a un sospechoso durante la comisión de un acto delictivo o en otras circunstancias especiales, pero permite la detención sin cargo hasta por 48 horas. El arresto y la detención arbitraria continuó siendo un problema, y hubo numerosos informes de personas detenidas y posteriormente liberadas con poca o ninguna explicación sobre las razones de la detención. Las ONG informaron que muchos de los detenidos fueron arrestados en la

escena del crimen o durante redadas contra las drogas. En muchos casos, las autoridades le tomaron las huellas dactilares, los interrogaron y luego fueron puestos en libertad.

Papel de la Policía y del Aparato de Seguridad

El Ministerio de Interior y Policía es el organismo rector de la Policía Nacional, la Policía Turística, y la Policía del Metro. El Ministro de Defensa dirige a los militares, a la Autoridad Aeroportuaria, Aviación Civil, Autoridad de Seguridad Portuaria y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza. La Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y la Dirección Nacional de Control de Drogas, instituciones que cuentan con personal de la policía nacional como de las fuerzas armadas, y se reportan directamente al Presidente de la República.

La policía operaba en un ambiente peligroso. El porte y tenencia de armas era generalizada, y los delitos y homicidios comunes especialmente en las zonas urbanas. La Oficina del Procurador General de la República reportó 74 ejecuciones extrajudiciales hasta junio y procesó 18 casos. Las autoridades destituyeron o procesaron a aquellos agentes de la policía que violaron los procedimientos policiales establecidos. La Unidad de Asuntos Internos investigó los cargos graves de mala conducta cometidos por miembros de la Policía Nacional. Estos casos se referían a agresiones físicas o verbales, amenazas, uso indebido de armas de fuego, asaltos, y robos.

Se ofrecieron capacitaciones para los militares y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y la Policía Nacional incluyó entrenamiento sobre los derechos humanos. Durante el año el Ministerio de las Fuerzas Armadas proporcionó capacitación en derechos humanos y orientación a oficiales de diversos rangos, así como a civiles. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza impartió formación obligatoria en materia de derechos humanos en sus centros de formación para los oficiales ubicados en la región fronteriza. La Escuela de Posgrado de Derechos Humanos y Derechos Humanos Internacionales capacitó a civiles y a personal de las fuerzas armadas. La escuela también ofreció programas a los miembros de las fuerzas armadas, funcionarios civiles del Congreso, de las fiscalías, del Tribunal Supremo, de los diversos ministerios, de la Policía Nacional y miembros de Junta Central Electoral. En julio, el gobierno aprobó una ley de reforma policial para frenar la corrupción, mejorar la capacitación e incrementar la transparencia.

Procedimientos de Detención y Manejo de los Detenidos

La Constitución establece que un acusado puede ser detenido por hasta 48 horas antes de ser presentado a las autoridades judiciales. La ley también le permite a la policía arrestar a cualquier persona sin una orden de arresto si ha sido atrapado cometiendo un delito o ha

sido vinculado razonablemente a un delito, como en los casos que involucre una persecución o a prisioneros que se han escapado. En ocasiones, la policía detuvo a todos los sospechosos y testigos de un crimen para investigarlos o cuestionarlos por un periodo de tiempo mayor a las cuarenta y ocho horas. Las audiencias de habeas corpus redujeron de manera significativa los abusos legales. El sistema de fianzas estaba en funcionamiento. También funcionaba un sistema operativo de arresto domiciliario.

La ley exige la prestación de asesoramiento a los indigentes arrestados, aunque los niveles de asistencia eran insuficientes para satisfacer la demanda. La Oficina Nacional de Defensoría Pública representó a aproximadamente un 80 por ciento de todas las causas penales presentadas ante los tribunales, aunque geográficamente sólo cubrieron 13 de 34 distritos judiciales. Muchos detenidos y presos que no podían pagar los honorarios de los abogados no tuvieron fácil acceso a un abogado. Los fiscales y jueces se ocuparon de los interrogatorios de menores, situación prohibida por o en presencia de la policía.

Detención Arbitraria: La policía realizó redadas esporádicas en comunidades de bajos ingresos y de alta criminalidad. Durante las mismas arrestaron o detuvieron a personas sin órdenes judiciales. Durante estas redadas la policía arrestó a un gran número de residentes e incautaron bienes que supuestamente fueron utilizados en actividades delictivas. Hasta julio, la Oficina de Defensoría Pública informó que de 525 casos de arresto arbitrario, sobre la base de estadísticas de casos donde las autoridades posteriormente liberaron a los acusados por falta de autorización legal. La Procuraduría General informó una disminución en las detenciones relacionadas con las redadas masivas en la escena del crimen gracias a un entrenamiento realizado conjuntamente con organizaciones no gubernamentales vinculadas a los derechos humanos.

Detención Preventiva: Muchos sospechosos sufrieron detenciones preventivas prolongadas. Bajo el Código Penal un juez puede ordenar que un detenido permanezca bajo custodia policial entre tres y 18 meses. Según la Dirección de Prisiones, el 62% de los internos eran presos preventivos. El promedio de tiempo impuesto a un preso preventivo fue de unos tres meses, pero hubo informes de casos que duraron hasta tres años. El tiempo cumplido durante la detención preventiva se aplicaba a completar la condena.

El fracaso de las autoridades de las prisiones de trasladar a los internos a sus citas en los tribunales provocó la suspensión de algunas audiencias. Muchos internos vieron sus citas judiciales pospuesta debido a la falta de transportación de la prisión al tribunal, o porque su abogado, coacusado, o testigos no comparecieron a la cita. A pesar de las protecciones adicionales garantizadas por el Código Penal, en algunos casos las autoridades detuvieron a los internos por mucho más tiempo de lo estipulado, aunque no hubiese cargos formales pendientes contra ellos.

Capacidad del Detenido de Impugnar la Legalidad de una Detención ante el Tribunal: Cualquier ciudadano detenido por más de 48 horas, sin que se le hayan presentado cargos formales, tiene el derecho a presentar un recurso de habeas corpus. El juez de dicha audiencia tiene la potestad de poner en libertad al detenido. La decisión del juez de liberar a un prisionero está sujeta a una apelación por parte del fiscal.

Detención Prolongada de Solicitantes de Asilo Rechazados o de Apátridas: Se reportaron casos aislados de solicitantes de asilo rechazados debido a la falta de documentos (ver Secciones 2.d y 6).

e. Negación de Juicio Público Imparcial

La ley prevé un sistema judicial independiente. Sin embargo, la influencia inadecuada sobre las decisiones judiciales fue muy amplia. Dichas interferencias osciló entre el sometimiento judicial selectivo a el retiro de casos supuestamente por haber recibido sobornos o presión política. El sistema judicial, de manera rutinaria, rechazó casos de corrupción durante los cinco años de la Administración del Presidente Medina. La corrupción del sistema judicial también fue un serio problema (ver Sección 4). La Oficina de Defensoría Pública informó que la forma más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales ocurrió cuando las autoridades se negaron respetar los recursos de hábeas corpus para liberar a los detenidos.

Procedimiento Judicial

La ley prevé una presunción de inocencia, el derecho a la defensa en un juicio público e imparcial, el derecho a confrontar o interrogar a los testigos, y el derecho a la no-autoincriminación. Los demandados tienen derecho a estar presentes y consultar con un abogado de manera oportuna, y los indigentes tienen derecho a un defensor público.

La ley prevé la interpretación libre cuando sea necesario. La Constitución también establece el derecho de apelación y le prohíbe a los tribunales superiores aumentar las sentencias emitidas por tribunales inferiores.

La Fiscalía del Distrito debe notificar al acusado y al abogado de los cargos criminales así como de las pruebas que la oficina presentará ante el tribunal. Los demandados y los abogados tienen acceso a evidencias en manos del gobierno y de enfrentar a los testigos adversos, pero sólo después de la audiencia preliminar cuando el juez haya aprobado la acusación. Los demandados tienen derecho a presentar sus propios testigos y pruebas.

Los tribunales militares y policiales comparten la jurisdicción en aquellos casos donde están involucrados representantes de las fuerzas de seguridad. Si bien los tribunales tienen jurisdicción sobre casos que involucran violaciones de las normas y reglamentos internos,

los tribunales penales civiles manejaron casos que involucraron asesinatos y otros delitos graves presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.

Presos Políticos y Detenidos

No hubo informes de prisioneros o detenidos políticos.

Procedimientos Judiciales Civiles y Recursos

Existen tribunales separados para las reclamaciones de materia penal, comercial, civil y laboral. Los tribunales comerciales y civiles supuestamente sufrieron retrasos en la adjudicación de casos, aunque sus decisiones fueron generalmente aplicadas. Así como en los tribunales penales, la influencia política o económica sigue siendo un problema.

Los ciudadanos tuvieron la posibilidad de presentar recursos de amparo, una acción para buscar reparación de cualquier violación de un derecho constitucional, incluidas las violaciones de los derechos humanos protegidos bajo la Constitución. Este recurso no fue usado con mucha frecuencia y sólo por aquellos con asesores legales sofisticados.

f. Interferencia Arbitraria o Ilegal con Privacidad, Familia, Hogar o Correspondencia

La ley prohíbe la entrada arbitraria a una residencia privada, excepto durante la persecución de un sospechoso, cuando un sospechoso es atrapado en el acto de cometer un crimen, o si la policía sospecha que una vida está en peligro. La ley establece que todas las demás entradas a residencias privadas requieren de una orden de arresto o de una orden de registro emitida por un juez. Sin embargo, la policía realizó búsquedas e incautaciones ilegales, incluyendo allanamientos sin órdenes judiciales en residencias privadas en muchos barrios pobres.

Aunque el gobierno negó el uso de escuchas telefónicas no autorizadas, el monitoreo de correos electrónicos privados u otros métodos subrepticios para interferir con la vida privada de las personas y familias, los grupos de derechos humanos y políticos de la oposición aseguraron que dicha interferencia continuó. Los partidos políticos de la oposición alegaron que los funcionarios gubernamentales amenazaron a sus subordinados con la pérdida de empleos y otros beneficios a fin de obligarlos a apoyar al PLD y asistir a los actos de campaña del PLD. La Oficina de Defensoría reportó sobre incidentes donde los miembros de una familia de un sospechoso fueron detenidos para obligar al sospechoso a entregarse a las autoridades. Las personas sin acceso a documentos de ciudadanía no pudieron votar, casarse o tener acceso a la educación u otros servicios básicos.

Sección 2. Respeto por las Libertades Civiles, Incluyendo:

a. Libertad de Expresión y Prensa

La Constitución prevé la libertad de expresión y de prensa, y el gobierno en términos generales respetó estos derechos. Los medios independientes se mantuvieron activos y expresaron una amplia variedad de opiniones con ciertas restricciones.

Prensa y Medios de Comunicación: Los individuos y grupos pudieron generalmente criticar el gobierno en público y en privado sin represalias, aunque hubo varios incidentes en los que las autoridades intimidaron a periodistas u otros profesionales de los medios.

Violencia y Acoso: Los periodistas y otras personas que trabajaron en los medios de comunicación fueron de vez en cuando hostigados o atacados físicamente. El matutino El Día informó que los periodistas, específicamente aquellos en zonas rurales, fueron amenazados tras investigar o denunciar grupos criminales o la corrupción oficial. La Sociedad Inter-Americana de Prensa reportó que los periodistas sufrieron ataques violentos de parte de policías y militares asignados a la seguridad de funcionarios públicos, especialmente durante protestas públicas y disturbios.

Censura o Restricción de Contenidos: La Constitución prevé la protección de la confidencialidad de las fuentes de los periodistas e incluye una “cláusula de conciencia”, lo que le permite a los periodistas rechazar asignaciones específicas. No obstante, los periodistas practicaron la autocensura, particularmente cuando la cobertura podría afectar adversamente los intereses políticos de los propietarios de medios. Los medios restringieron la publicación de los nombres de periodistas que cubren historias relacionadas con el narcotráfico y otros asuntos de seguridad con el interés de protegerlos.

Difamación/Calumnia: La ley penaliza la difamación y el insulto con penas más duras que por delitos cometidos contra figuras públicas o estatales que por ofensas contra particulares. El Colegio Dominicano de Periodistas informó que los periodistas fueron demandados por políticos, representantes del sector privado y público, y grupos criminales para presionarlos para que dejaran de realizar reportajes. En febrero, el Tribunal Constitucional anuló varios artículos de la Ley de Libertad de Expresión que criminalizaban denuncias relacionadas con hechos de interés público y que eran consideradas perjudiciales. El Tribunal también dictaminó que los medios de comunicación, su personal ejecutivo, y los editores no eran responsables de demandas por difamación contra periodistas, aliviando así algunas presiones del pasado de que los intereses empresariales, que controlaban gran parte de los principales medios de comunicación, ejercían sobre los periodistas. La ley sigue penalizando la difamación por declaraciones sobre la vida privada de ciertas personalidades públicas, incluyendo funcionarios públicos y Jefes de Estado internacionales.

Libertad de Internet

No hubo restricciones gubernamentales en cuanto a acceso al Internet. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones el 52 por ciento de los ciudadanos utilizaban el Internet en el 2015.

Libertad Académica y Eventos Culturales

No hubo restricciones gubernamentales a la libertad académica ni a eventos culturales.

b. Libertad de Asociación y de Reuniones Pacíficas

Libertad de Asociación

La ley establece la libertad de asociación. Las marchas públicas y las reuniones requieren de permisos, que el gobierno normalmente concedió. En varias ocasiones la policía utilizó la fuerza para dispersar manifestaciones, hiriendo a manifestantes y a los espectadores.

Libertad de Asociación

La ley prevé la libertad de asociación, y en general el gobierno respetó este derecho (véase Sección 7.a.).

c. Libertad de Religión

Véase el Informe sobre la Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado: www.state.gov/religiousfreedomreport/

d. Libertad de Circulación, Desplazados Internos, Protección de los Refugiados y Apátridas

La ley prevé la libertad de movimientos internos, los viajes al extranjero, la emigración y la repatriación, y el gobierno generalmente respetó estos derechos con algunas excepciones. El gobierno cooperó de manera limitada con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con otras organizaciones de protección y asistencia a los desplazados internos, a los refugiados, a los refugiados que regresan, a los solicitantes de asilo, apátridas u otras personas que generan preocupación.

En el 2014, el gobierno promulgó un Plan Nacional de Regularización que les permitió a los inmigrantes indocumentados en el país solicitar su residencia legal temporal. En enero

de 2014 el gobierno suspendió todas las deportaciones de inmigrantes para darles la oportunidad de participar en este Plan. El límite de tiempo del plan cerró en junio de 2015, y en agosto de 2015 el gobierno reanudó las deportaciones. En julio, el Gobierno extendió la fecha de vencimiento de las tarjetas de residencia temporal expedidas bajo el Plan.

El Plan Nacional de Regularización le concedió estatus de residencia temporal a aproximadamente 250,000 inmigrantes irregulares (98 por ciento de origen haitiano). De acuerdo a los datos del censo, hasta 280,000 inmigrantes haitianos posiblemente no pudieron solicitar o calificar en el proceso de regularización y estaban sujetos a deportación. Los funcionarios de la ONU acompañaron a las autoridades de inmigración durante los procesos de interceptación, realizados en varias provincias. Según las Naciones Unidas, los procedimientos de deportación observados fueron ordenados, legales e individualizados, de conformidad con las leyes internacionales de derechos humanos. El gobierno invitó a la comunidad internacional para observar y comentar sobre las deportaciones. La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) informó que, a partir de septiembre, los militares patrullaban la frontera y trasladaron a las personas detenidas sin los procedimientos establecidos, poniendo así en peligro a otras poblaciones indocumentadas, incluidos los beneficiarios del Plan de Regularización, y los dominicanos indocumentados. En agosto, la OIM contó a 13 personas con residencia legal las cuales fueron detenidas en espera de ser trasladadas y que debieron de haber estado protegidas de la deportación. La OIM ayudó a estas personas a evitar la deportación.

La OIM también informó sobre casos de personas deportadas porque las autoridades no les permitían retirar sus documentos de inmigración o de ciudadanía de sus residencias, así como las deportaciones de mujeres que dejaron a sus niños en sus residencias.

Protección de los Refugiados

Acceso al Asilo: La ley prevé la concesión del asilo o del estado de refugiado.

El gobierno tiene un sistema establecido de protección de refugiados pero no ha sido implementarlo de manera efectiva. El ACNUR reconoció a más de 600 solicitantes de asilo mientras que el gobierno reconoció sólo 26. De los más de 300 solicitantes de asilo desde el 2012 que recibieron una decisión final, el gobierno rechazó el 99 por ciento con la justificación indefinida de “faltas de pruebas”. Las ONGs concluyeron que sólo esta situación era evidencia de una discriminación sistemática, ya que el 99 por ciento de los solicitantes de asilo eran también de origen haitiano.

La Oficina Nacional de Refugiados, de la Dirección de Migración del Comité Nacional de Refugiados (CONARE), adjudica las solicitudes de asilo. El CONARE es una comisión inter-institucional que incluye a la Cancillería, al Departamento Nacional de

Investigaciones (DNI) y la Dirección General de Migración. El pleno de la comisión tiene la responsabilidad de tomar la decisión final sobre las solicitudes de asilo.

Una resolución del CONARE de 2013 requiere que las personas soliciten asilo dentro de los 15 días de su llegada al país. En virtud de esta resolución, si un solicitante de asilo se encuentra en el país por más de 15 días y no solicita asilo, dicho solicitante perderá de manera permanente el derecho a solicitar asilo. La resolución también determina como inadmisibles cualquier solicitud de asilo de una persona que ha estado en, o procede de un país donde la persona pudo haber pedido asilo. Por ende, el gobierno toma decisiones administrativas inadmisibles antes de que CONARE realice una entrevista o evaluación de asilo.

Según las ONGs que trabajan con refugiados, en los puertos de entrada no había información disponible notificando el derecho de solicitar asilo ni de las fechas ni del proceso establecidos para hacer la solicitud. Además, estas ONGs informaron que los funcionarios de inmigración no sabían cómo manejar los casos de asilo. Los oficiales de protección del ACNUR fueron otorgados acceso, de manera impredecible, a los solicitantes de asilo detenidos. Las políticas de CONARE no prevén medidas de protección en el proceso de deportación. Por ley, el gobierno debe garantizar el debido proceso a los solicitantes de asilo detenidos, y aquellos que han expresado temor de regresar a su país de nacionalidad o de residencia habitual se les deben permitir solicitar asilo bajo los procedimientos establecidos.

Sin embargo, en términos generales no se produjeron revisiones judiciales de órdenes de deportación ni revisiones de terceros para realizar chequeos para fines de seguridad.

El CONARE no le facilitó a los solicitantes de asilo rechazados detalles de las razones de su rechazo de su solicitud inicial de asilo o información sobre el proceso de apelación. Los solicitantes rechazados recibieron una carta informándoles que tenían 30 días para salir voluntariamente del país. Por política gubernamental, los solicitantes que han sido rechazados tienen siete días desde la recepción del aviso de denegación para presentar una apelación. Sin embargo, la carta de notificación de denegación no menciona este derecho de apelación.

Libertad de Movimiento: A partir de 2015, los refugiados aprobados recibieron documentos de viaje emitidos por el gobierno por una tarifa de RD\$3,150 (US\$70). Los refugiados comentaron que el documento de viaje describía su nacionalidad como “refugiado” y no la de su país de origen. Los solicitantes de asilo con casos pendientes sólo tenían una carta que debían presentar para evitar la deportación, lo que limitó su libertad de movimiento.

Empleo: El gobierno le prohibió trabajar a los solicitantes de asilo con casos pendientes. Esta situación se complicó aún más por el largo, y a veces indefinido período de casos pendientes. La falta de documentación también les impidió a los refugiados trabajar en cierto tipo de empleo. Sin embargo, el empleo era un requisito para renovar las tarjetas de residencia temporal de los refugiados.

Acceso a Servicios Básicos: Los refugiados aprobados reciben los mismos derechos y responsabilidades de los inmigrantes legales con permisos de residencia temporal. Esto les proporcionó a los refugiados el derecho a acceder a los sistemas de educación, empleo, salud, y otros servicios. El ACNUR informó que, en la práctica, había problemas. Sólo aquellos refugiados capaces de pagar un seguro de salud tuvieron acceso a una atención médica adecuada. Los refugiados informaron que los números de identificación emitidos por el gobierno no eran reconocidos y, por ende, no podían acceder a otros servicios como abrir una cuenta de banco o solicitar contratos para los servicios básicos. En estos casos tenían que depender de amigos o familiares para recibir tales servicios.

Personas Apátridas

Antes de 2010, la Constitución le otorgó la nacionalidad a cualquier persona nacida en el país, excepto a los niños nacidos de diplomáticos o niños nacidos de padres que estaban “en tránsito”. La Constitución de 2010 agregó una excepción adicional para los niños nacidos en el país a padres sin un estado migratorio. En el 2013, el Tribunal Constitucional determinó que los niños nacidos en el país a extranjeros “en tránsito” no eran ciudadanos dominicanos.

En efecto, el fallo revisó retroactivamente las leyes de traspaso de ciudadanía y despojó de su nacionalidad a aproximadamente 135,000 personas, en su mayoría hijos de inmigrantes haitianos indocumentados que habían obtenido su nacionalidad desde 1929 en virtud del *jus soli*.

Hasta el 2012, la Constitución haitiana no permitía la doble nacionalidad. Por lo tanto, las personas de ascendencia haitiana que obtuvieron la nacionalidad dominicana al nacer por virtud de nacer en suelo dominicano perdieron su derecho a la ciudadanía haitiana. En el 2013, el Tribunal Constitucional despojó a casi todos los afectados de la única nacionalidad que tenían.

La Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH), el ACNUR y la Comunidad del Caribe criticó la sentencia del Tribunal Constitucional de 2013. La CIDH constató que el fallo del Tribunal, de 2013, implicaba una privación arbitraria de la nacionalidad. Asimismo, que el fallo tenía un efecto discriminatorio, la nacionalidad despojada retroactivamente, y condujo a la apatridia a individuos no considerados ciudadanos.

En mayo de 2014 el Presidente Medina firmó y promulgó la Ley 169-14, “el Estatuto Especial de los Individuos nacidos en el territorio con registro irregular en el Registro Civil y sobre Naturalización”. La Ley 169-14 propone regularizar y volver a emitir documentos de identidad a personas nacidas en el país entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril de 2007 a los padres inmigrantes indocumentados, que estaban previamente inscritos en el Registro Civil (Grupo A), reconociéndolos como ciudadanos dominicanos desde su nacimiento. Sobre la base de una auditoría de los archivos del registro civil nacional, se estimó que esa población era de unas 60,000 personas. La Ley también crea un camino especial para aquellas personas nacidas de padres inmigrantes indocumentados que nunca se inscribieron en el Registro Civil, incluyendo un estimado de 45,000-75,000 personas indocumentadas, predominantemente de ascendencia haitiana (Grupo B). Las personas del Grupo B pueden solicitar residencia legal bajo esta Ley y solicitar la naturalización ciudadana después de un período de dos años. La Ley le otorgó a los del Grupo B 180 días para solicitar la residencia legal, dándoles así una ventana de oportunidad que concluiría el 31 de enero de 2015. Un total de 8,755 personas del Grupo B solicitaron con éxito antes de vencerse el plazo. En noviembre de 2015, el gobierno aprobó 6,262 casos y siguió procesando el resto. Las ONGs y los gobiernos extranjeros expresaron su preocupación por el número potencialmente elevado del Grupo B que no se presentaron dentro del plazo. El gobierno se comprometió a resolver cualquier caso no registrado del Grupo B, pero no existía un marco legal a través del cual se podría cumplir dicho compromiso. El gobierno también se comprometió a no deportar a nadie nacido en el país.

En junio de 2015 el registro civil (conocido como la Junta Central Electoral o JCE) anunció que había transferido los registros civiles de las 54,307 personas identificadas en el Grupo A a un libro separado del Registro Civil y anuló sus registros originales. La JCE invitó a las personas incluidas en dichas listas a reportarse ante las oficinas de la JCE para recibir una nueva acta de nacimiento. La gran mayoría de las personas que aparecían en la lista eran de descendencia haitiana. A finales de 2015 grupos de la sociedad civil informaron que muchas personas del Grupo A experimentaron dificultades para obtener sus nuevas actas de nacimiento en las oficinas de la JCE.

Las ONGs también documentaron casos de personas que calificaban dentro del Grupo A, pero que no fueron incluidas en la lista de resultados de la auditoría realizada por la JCE. En respuesta, el gobierno presentó una serie de nuevos mecanismos para facilitar la emisión de documentos de nacionalidad para el Grupo A. El gobierno también anunció nuevos mecanismos para reportar los retrasos o fallas en la expedición de dichos documentos en las oficinas regionales de la JCE en todo el país, incluyendo una línea telefónica y las redes sociales. Las ONGs informaron a principios del año que estas medidas mejorarían las tasas de emisión de documentos para el Grupo A, aunque señalaron que algunas oficinas de la

JCE continuaban negando la emisión a algunos solicitantes de ciudadanía del Grupo A y que calificaban plenamente.

Un estudio de la Oficina Nacional de Estadísticas de 2012 y del Fondo de Población de la Naciones Unidas determinó que la población haitiana total en el país era de 668,145, de los cuales 458,233 fueron identificados como inmigrantes haitianos y 209,912 como personas descendientes de haitianos. El número exacto de personas indocumentadas permaneció incierto.

Las personas de descendencia haitiana nacidas en República Dominicana, sin documentos de ciudadanía o de identidad, confrontaron obstáculos al intentar viajar fuera y dentro del país. Además, las personas indocumentadas no pudieron obtener tarjetas nacionales de identificación o carnets para votar en las elecciones. Las personas que no tenían un carnet de identificación nacional o acta de nacimiento tuvieron un acceso limitado a los procesos electorales, a los sectores laborales formales, a la educación pública, a la declaración de nacimiento y de matrimonio, a los servicios formales de financiamiento como bancos y préstamos, a los tribunales y procedimientos judiciales, y a la propiedad de tierra o propiedades.

El 25 de septiembre, un abogado de derechos humanos quien trabajaba en un importante caso que involucraba a los dominicanos de descendencia haitiana, y que fueron impactados por la sentencia del Tribunal Constitucional, fue seguido por personas tras salir de su trabajo, provocado por defender a los haitianos y atacado con un bloque de cemento, provocándole heridas que requirieron de su internamiento en un hospital. Amnistía Internacional reportó una tendencia de ataques verbales y físicas en otras personas que trabajaban con este tema.

Sección 3. Libertad para Participar en el Proceso Político

La ley le garantiza a los ciudadanos la libertad de elegir a su gobierno por medio de elecciones periódicas libres e imparciales, realizadas a través del voto secreto fomentado por el voto casi universal e igualitario, y garantizando la libre expresión de la voluntad del pueblo. Según la Constitución, los miembros activos de la policía y los militares no pueden votar o participar actividades políticas partidistas.

Las Elecciones y la Participación Política

Elecciones Recientes: El 15 de mayo, los votantes participaron en el proceso de elecciones generales para todos los niveles del gobierno y eligieron a Danilo Medina del PLD como presidente para un segundo periodo de cuatro años. Según la JCE, más de un 69% del

electorado votó. La JCE introdujo un nuevo sistema de voto electrónico para contar los votos. Según los observadores internacionales y los expertos en los sistemas de voto electrónico, la JCE no siguió los estándares internacionales, como tampoco auditó ni implementó, de manera gradual, dicho sistema. En respuesta a las dudas surgidas por este nuevo sistema, varios partidos políticos de oposición se quejaron de manera pública y formal ante la JCE, pero la JCE no respondió directamente a sus quejas. El día de las elecciones muchos sistemas electrónicos de votación falló o no fueron usados. La JCE había utilizado, previamente, un sistema de conteo eficiente y preciso. Muchos centros de votación utilizaron este sistema en vez del nuevo sistema electrónico. Los diversos procesos para contar los votos provocaron confusión en los resultados, tales como que la JCE no anunció resultados finales y oficiales con todos los votos contados hasta 13 días después de las elecciones. Muchas candidaturas congresionales y municipales fueron debatidas durante semanas, lo que provocó protestas esporádicas y violencia. El día de las elecciones, la Organización de Estados Americanos (OEA) y los observadores nacionales detectaron la celebración de campañas políticas fuera de los centros de votación en violación a la ley, así como indicios de la compra de votos.

Partidos Políticos y Participación Política: La OEA y las ONGs nacionales criticaron la desigualdad de las campañas políticas. Tal y como indica la ley, los partidos mayoritarios, definidos como aquellas que recibieron el 5 por ciento o más del voto en las elecciones previas, recibieron el 80 por ciento de las finanzas para las campañas, mientras que los partidos minoritarios tuvieron que compartir el 20 por ciento de los fondos públicos. Una ONG nacional destacó un gran incremento en los gastos gubernamentales en publicidad durante los meses antes de las elecciones y criticaron al gobierno y al partido PLD por el uso de los fondos públicos para financiar sus campañas, lo que está claramente prohibido por ley. Según los grupos de la sociedad civil, el incumbente partido PLD también utilizó fondos públicos, además de los fondos destinados para la campaña, para pagar por esta publicidad.

Durante el primer trimestre de 2016, durante la etapa pico de la campaña, el gobierno y el PLD clasificaron como los números dos y tres, respectivamente, detrás de Claro, la telefónica más grande del país, en gastos de campaña. Según los monitores de la campaña, en el 2015 el gobierno gastó más de 10 millones de pesos (US\$220,000) por día en publicidad. Durante los primeros meses de 2016, esa cifra se disparó a 14 millones de pesos (US\$310,000) por día, y el presupuesto de publicidad de la Oficina del Presidente se disparó en más de 300 por ciento. Estos gastos bajaron luego que el Presidente Medina ordenara suspender el uso de los fondos públicos en marzo. Según los grupos de la sociedad civil, estos ingresos a su vez influyeron a los grupos de medios y los motivó a que censuraran las voces que criticaban a su cliente más importante, el PLD.

La Participación de las Mujeres y Minorías: Ninguna ley limita la participación de las mujeres en el proceso político, y sí participaron. La JCE estableció varias medidas para incrementar la participación de los votantes, incluyendo acceso para los votantes con discapacidad, para votar en el hogar y el voto presidencial en las prisiones. La JCE reportó que por lo menos 104 personas con discapacidades votaron desde sus hogares, pero los observadores nacionales e internacionales llegaron a observar obstáculos para acceder a los centros de votación. La iniciativa para realizar el voto electoral en las prisiones contribuyó a la participación de 1,579 prisioneros. Casi todas las personas impactadas por la sentencia de 2013 del Tribunal Constitucional no pudieron votar en las elecciones de mayo, ya que la mayoría del Grupo A no empezaron a recibir sus documentos de nacionalidad bajo la Ley 169-14 hasta después del cierre del registro electoral, el 16 de enero de 2016. Los carnets de identificación emitidos claramente indicaban “No Voto 2016”.

Sección 4. La Corrupción y la Falta de Transparencia en el Gobierno

La ley establece penas criminales para la corrupción oficial; sin embargo, el gobierno no implementó dicha ley de manera efectiva y los funcionarios se involucraron con frecuencia en prácticas corruptas con impunidad. El Procurador General investigó presuntos funcionarios corruptos, pero no aseguró ninguna condena contra dichos funcionarios. La corrupción gubernamental sigue siendo un problema grave, así como las quejas de la ciudadanía.

El Ministerio Público, dirigido por el Procurador General, fue el encargado de investigar y procesar los casos de corrupción a través de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (PEPCA). La Cámara de Cuentas apoyó los esfuerzos de transparencia del gobierno a través de auditorías e investigaciones, fortaleciendo así la base de muchos casos de corrupción de la PEPCA. La PEPCA, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General funcionaron de manera independiente y sin influencia política.

Aunque los organismos gubernamentales se quejaron de la falta de recursos, las organizaciones no gubernamentales creíbles señalaron que el mayor obstáculo era la falta de voluntad política para aplicar la ley y llevar ante los tribunales a los políticos, específicamente aquellos de alto rango.

Corrupción: Las organizaciones de la sociedad civil criticaron la práctica de nombrar en puestos gubernamentales como mecenazgo político y alegaron que muchos de estos empleados públicos no desempeñan ninguna función laboral a pesar de cobrar un sueldo. Los pequeños municipios reportaron tener un personal muy por encima del espacio físico de las oficinas.

Las ONGs, así como los ciudadanos comunes, informaron regularmente que agentes de la policía exigían sobornos durante las paradas rutinarias de tráfico de rutina o de arrestos. Numerosas personas reportaron que fueron despojados de sus pertenencias personales por miembros de la policía. La policía habría detenido conductores, incluyendo turistas extranjeros, y pidieron dinero a cambio de su puesta en libertad. Los observadores locales de derechos humanos reportaron que oficiales de inmigración y de la policía, especialmente en contra de inmigrantes indocumentados de ascendencia haitiana, los extorsionaban amenazándolos con deportarlos. Las ONGs reportaron incidentes de corrupción entre militares y funcionarios de inmigración estacionados en puestos fronterizos y puestos de control.

Los oficiales penitenciarios aceptaron dinero a cambio de ofrecer recomendaciones para liberar prisioneros por razones de salud. Se registraron alegatos creíbles de que los presos pagaron sobornos para obtener libertad anticipada bajo libertad condicional.

En ocasiones, el gobierno usó sanciones no judiciales para castigar la corrupción, incluyendo el despido o la transferencia de personal militar, de agentes policiales, jueces y otros funcionarios de menor rango que participan en procesos de soborno y otros actos de corrupción.

Sin embargo, la aceptación generalizada y la tolerancia de pequeños actos de corrupción entorpecieron los esfuerzos anticorrupción.

El 8 de septiembre la Suprema Corte de Justicia desestimó el caso de corrupción contra el ex Ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, por falta de pruebas. El caso de Díaz Rúa había estado pendiente durante dos años después de que se realizara una investigación detallada sobre el mal manejo financiero y millones de dólares en bonos no autorizados.

Divulgación Financiera: La ley requiere que el Presidente, la Vicepresidente, los miembros del Congreso, algunos jefes de agencias y otros funcionarios, incluyendo los colectores impositivos y aduaneros, presenten declaraciones de sus bienes personales dentro de los 30 días de ser contratados, elegidos o reelegidos, así como cuando salen de sus cargos.

La Constitución también exige que los funcionarios públicos declaren la procedencia de sus bienes. La ley nombra a la Cámara de Cuentas como la responsable de recibir y revisar dichas declaraciones. Hasta octubre, 1,028 funcionarios públicos habían cumplido con la ley mientras que otros 2,058 no lo habían hecho. Las ONGs que trabajan con el tema de la transparencia cuestionaron la veracidad de dichas declaraciones, ya que los importes fluctuaron significativamente de un año a otro, y los activos declarados con frecuencia parecían poco realistas.

Acceso Público a la Información: La Constitución prevé el acceso público a la información gubernamental. La ley impone límites a la disponibilidad de dichas informaciones sólo en determinadas circunstancias, como la protección de la seguridad nacional. Las autoridades están obligadas a revelar o responder a las solicitudes de acceso dentro de los 15 días hábiles, y las solicitudes de procesamiento son gratuitas o las tarifas razonables. La ley prevé penas de hasta dos años de prisión y una prohibición de cinco años desde posiciones de confianza pública para funcionarios que obstaculizan el acceso a la información. Las respuestas a las solicitudes a menudo eran oportunas pero incompletas y con regularidad el gobierno rechazaba las solicitudes de seguimiento. Aunque mucha información estaba fácilmente disponible en línea, con frecuencia la información era inexacta o inconsistente con otros informes gubernamentales.

Sección 5. Actitud Gubernamental con Respecto a la Investigación Internacional y No Gubernamental de Presuntas Violaciones de los Derechos Humanos

En términos generales varias organizaciones nacionales e internacionales generalmente operaban sin restricción gubernamental, investigando y publicando sus conclusiones sobre los casos de derechos humanos. Aunque los funcionarios solían cooperar y ser receptivos, los grupos de derechos humanos que abogaron por los derechos de los haitianos y de las personas de ascendencia haitiana resultaron ser la excepción y se enfrentaron en ocasiones con obstáculos gubernamentales. El 8 de enero, en un gesto sin precedentes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Junta Central Electoral (JCE) se reunieron con un grupo de ONGs de todo el país que abogaban por los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana. A pesar del compromiso público de llevar este proceso a cabo, el gobierno no volvió a celebrar reuniones posteriores.

Organismos Gubernamentales de Derechos Humanos: La Constitución establece el cargo de defensor de los derechos humanos, y en 2013 el Senado nombró a Zoila Martínez, Ex-fiscal de Santo Domingo por un período de seis años. La figura del Defensor del Pueblo, según lo establece la Constitución, es salvaguardar los derechos humanos fundamentales de las personas y proteger los intereses colectivos establecidos por la ley. La Comisión Inter-institucional de Derechos Humanos está presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores y el Procurador General de la República. La comisión no se reunió con regularidad. La Procuraduría General tiene su propia división de derechos humanos.

Sección 6. Discriminación, Abusos Sociales y Trata de Personas

La Mujer

Violación y Violencia Doméstica: La ley penaliza la violencia contra la mujer, incluyendo la violación, el incesto, la agresión sexual y otras formas de violencia doméstica. Las penas de condena por estos delitos oscilan entre uno y 30 años de prisión, y multas de 700 a 245,000 pesos (U\$15 a U\$5,400). Las sentencias por condena de violación, incluida la violación conyugal, oscilan entre los 10 y 15 años de prisión y entre 100,000 a 200,000 pesos (entre U\$2,210 y U\$4,420). En los casos de violación de una persona vulnerable o de un niño, o que ocurra bajo circunstancias atroces, la condena es de 10 a 20 años de prisión.

La violación fue un problema serio y generalizado. Los sobrevivientes de violación a menudo no reportaban el crimen por temor al estigma social, a la retribución, y a la percepción de que tanto la policía como el sistema judicial no proporcionarían reparación de los daños.

El Estado puede procesar a un sospechoso de violación, incluyendo la violación conyugal, aun cuando la víctima no presente cargos. Por lo general, la policía alentó a las víctimas de violación a solicitar asistencia en la Unidad de Violencia de Género de la Policía Nacional, de la Procuraduría General de la República, los defensores públicos o las ONGs.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar la situación, la violencia contra las mujeres fue generalizada. La Policía Nacional informó que 54 mujeres fueron asesinadas por sus parejas al mes de julio. La Procuraduría General de la República informó que 6,000 mujeres fueron víctimas de agresión sexual por año. El Procurador General de la República informó que había recibido más de 500,000 denuncias relacionadas con la violencia sexual, y que las quejas aumentaban aproximadamente un 33 por ciento anualmente. La Procuraduría General de la República también informó que el número de expedientes pendientes excedió la capacidad de las cortes, por lo que sólo una pequeña fracción de estos expedientes llegaron a los tribunales.

La Procuraduría General de la República tiene a su cargo la Unidad de Prevención y Atención contra la Violencia, entidad que cuenta con 18 oficinas en las 32 provincias del país. En estas oficinas las víctimas de violencia pueden presentar denuncias penales, obtener asesoramiento, y recibir atención psicológica y médica. Cada oficina cuenta con psicólogos profesionales para asesorar a las víctimas y evaluar la amenaza de peligro inminente asociado con la queja presentada. Estas oficinas tienen la facultad de emitir un orden de restricción temporal inmediatamente después de recibir una queja.

En un paso adicional para abordar el problema, la Procuraduría General de la República instruyó a sus funcionarios de no resolver los casos de violencia contra la mujer e incluso en los casos en que las víctimas retiraron los cargos. Los fiscales ofrecieron asistencia y

protección a las víctimas de violencia al referir dichos casos a las instituciones legales, médicas y psicológicas correspondientes. La Procuraduría General de la República también instruyó a sus funcionarios a concluir la investigación y de presentar los cargos dentro de los 35 días a menos que el caso fuese declarado complejo.

La Oficina de Atención a la Mujer y la Violencia Interfamiliar, encabezada por la Coronela Teresa Martínez, gestionó la instalación de líneas de llamada de emergencia para facilitar un rápido servicio. La oficina contaba con un oficial de policía entrenado en seis de las 17 oficinas distribuidas en el país.

El Ministerio de la Mujer, institución que contaba con escasos recursos, promovió activamente la igualdad y la prevención de la violencia contra la mujer a través de la implementación de cursos educativos sobre el acoso sexual y talleres para beneficio de otros ministerios y oficinas.

El ministerio manejó dos refugios para las sobrevivientes de la violencia doméstica en lugares secretos, donde las personas abusadas se podían reportar a la policía y recibir asesoría. Los refugios le ofrecieron a las mujeres con asistencia a corto y mediano plazos, de hasta tres meses, para escapar de situaciones de violencia, aunque la alta demanda de estos centros limitaban la estadía a 15 días. El ministerio tuvo presencia en 31 oficinas provinciales y 21 oficinas municipales, donde ofrecían consejos legales gratuitos y asistencia siquiátrica para las víctimas. El ministerio también manejó dos programas para rehabilitar a las personas condenadas por violencia doméstica o violencia de género. Al mes de abril, los refugios habían recibido 237 mujeres; sin embargo, con una capacidad para sólo 25 mujeres y niños a la vez, los centros de refugios no pudieron acomodar a todas las víctimas.

Las ONGs declararon que aunque existían leyes para castigar la violencia de género, el sistema judicial no respondió de manera adecuada para implementar dichas leyes. El sistema no contaba con un enfoque integral para el cuidado de las víctimas, y el sistema judicial no tenía los recursos para procesar a los infractores de manera exitosa, y el número de refugios para mujeres resultó inadecuado para velar por las necesidades de las mujeres.

Acoso Sexual: El acoso sexual en el lugar de trabajo es un delito menor, y su condena representa un año de prisión y una multa equivalente a la suma de tres a seis meses de salario. Sin embargo, los líderes sindicales informaron que la ley no se cumplía y que el acoso sexual seguía siendo un problema (véase Sección 7.d.)

Derechos Reproductivos: Las parejas y las personas tienen el derecho de decidir el número, el espaciamiento y el tiempo en que quieren concebir sus hijos; manejar su salud

reproductiva; y tener acceso a los medios y a la información necesarias para tomar decisiones libres de discriminación, coerción, y la violencia. Las ONGs que trabajan en el área de planificación familiar proporcionaron anticonceptivos sin cargo alguno. Sin embargo, muchas mujeres de bajos ingresos los usaron de manera inconsistente debido a la irregularidad de su disponibilidad y las influencias sociales. Las creencias religiosas y las costumbres sociales redujeron el uso de métodos modernos de planificación familiar. Según estimaciones de 2016, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) reveló que el 69 por ciento de los métodos anticonceptivos, y el 11 por ciento de las mujeres, tenían una necesidad insatisfecha de planificación. La necesidad insatisfecha fue mayor entre las mujeres jóvenes y los adolescentes (28 por ciento), y la esterilización representó casi la mitad de todos los métodos utilizados. El UNFPA informó que la tasa de natalidad proveniente de las adolescentes también era alta, de 90 nacimientos por cada 1,000 niñas entre los 15 a 19 años, y que el 21 por ciento de los adolescentes eran madres o estaban embarazadas. Aunque el 98 por ciento de los nacimientos fueron atendidos por personal de salud calificado, la mortalidad materna fue de 92 muertes por 100,000 nacidos vivos, y el riesgo de morir por vida de la muerte materna fue uno de cada 400, según estimaciones de la ONU de 2015.

Hasta junio, los hospitales maternos del país informaron que 35 mujeres habían muerto durante el proceso de parto. La mortalidad materna sigue siendo un problema por razones médicas, incluyendo el incumplimiento de los estándares de calidad, la falta general de rendición de cuentas y una cultura ineficaz relacionada con la seguridad del paciente, referimientos inadecuados, y la sustitución de los profesionales por médicos residentes sin la supervisión suficiente.

Una alta tasa de embarazos entre las adolescentes siguió siendo una preocupación. Los hospitales maternos del país reportaron una tasa de embarazo de adolescentes de un 28 por ciento. Otros factores significativos que contribuyeron a las muertes maternas y neonatales fueron la mala calidad de la atención y la falta de acceso a los servicios de salud, así como las complicaciones durante el embarazo y el parto. La mayoría de las mujeres y niñas tenían acceso a algún tipo de atención postnatal, aunque la falta de atención postnatal fue mayor entre las que tenían bajos niveles de educación y provenían de sectores económicamente deprimidos, así como las madres jóvenes.

Discriminación: Aunque la ley otorga a las mujeres y hombres los mismos derechos legales, las mujeres no gozaban de una situación económica y social o de oportunidades iguales a los hombres. Los hombres ocupaban aproximadamente el 70 por ciento de las posiciones de liderazgo en todos los sectores. Sólo el 11 por ciento de las empresas contaban con ejecutivas dentro de su personal. Según el Banco Inter-Americano de Desarrollo, el promedio de las mujeres recibirá un salario que era 16 por ciento menos que

el de los hombres en trabajos de igual contenido y que requerían habilidades iguales. En el 2014, la tasa promedio de desempleo entre los hombres era de un nueve por ciento de la mano de obra activa, mientras que la tasa para las mujeres era del 23 por ciento. Según algunos informes, algunos empleadores sometían a las mujeres a pruebas de embarazo antes de contratarlas como parte de un examen médico requerido. A pesar de que es ilegal discriminar sobre la base de tales pruebas, los líderes de las ONGs informaron que los empleadores a menudo no contrataban mujeres embarazadas, y a veces despedían a las mujeres que quedaron embarazadas. No había programas gubernamentales eficaces para combatir la discriminación económica contra la mujer.

Los Niños/Niñas

Registro de Nacimientos: La nacionalidad viene acompañada con el nacimiento en el país, excepto a los niños y niñas nacidos a diplomáticos, a padres que están "en tránsito" o a hijos de padres que están en el país de manera ilegal en el país (véase Apartado 2.d.). Un niño nacido en el extranjero de una madre o padre dominicano también puede adquirir la nacionalidad. Un niño/niña no registrado al nacer se considera indocumentado hasta que los padres presenten una declaración de nacimiento tardía. Según UNICEF, el 12 por ciento de los niños menores de cinco años no están legalmente registrados.

Educación: La Constitución estipula que la educación pública es gratuita y obligatoria hasta los 18 años, aunque no todos los niños asisten a las escuelas. Un informe de junio de UNICEF mostró que el 26.8 por ciento de los niños/niñas pobres no asistieron a la escuela primaria, en comparación con el 4.3% de niños de clase media y alta. Se requiere un certificado de nacimiento para ingresar a la secundaria, lo que desalentó a algunos niños de asistir o completar sus estudios, especialmente los niños de ascendencia haitiana afectados por la decisión de 2013 del Tribunal Constitucional (véase Sección 2.d.). Los niños que carecían de dicha documentación tampoco pudieron asistir a la escuela secundaria (después del octavo grado) y tuvieron problemas de acceso a otros servicios públicos.

Abuso Infantil: El abuso de niños y niñas, incluyendo el abuso físico, sexual y psicológico, siguió siendo un serio problema. En mayo, el Procurador General públicamente denunció el problema del abuso infantil y declaró que su Oficina había recibido 2,315 informes de abuso infantil. La Unidad de Niños/Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de la República mantuvieron una línea de emergencia para que las personas pudieran llamar y reportar casos. Con frecuencia, a los casos no se les dio seguimiento debido a la vergüenza familiar, la falta de recursos económicos, o por falta de conocimientos sobre la asistencia

legal. La Fiscalía del Distrito Nacional reportó que en la mayoría de los casos de abuso, el acusado resultó ser una persona cercana al menor, como por ejemplo un miembro de la familia o un allegado cercano de la familia. La ley prevé el retiro de un menor maltratado del hogar hacia un ambiente de protección.

La ley contiene disposiciones relativas al maltrato infantil, incluyendo el maltrato emocional, la explotación sexual y el trabajo infantil. La ley prevé condenas de dos y cinco años de encarcelamiento y multas de unos tres a cinco salarios mínimos mensuales por parte de las personas condenadas por abusar de un menor. La penalidad se duplica si el abuso está relacionado con la trata. La Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas del Gobierno Nacional coordinó los esfuerzos de las entidades oficiales y las ONGs para ayudar a los niños víctimas de la violencia y el abuso.

Matrimonio Temprano y Forzado: La edad mínima legal para contraer matrimonio con el permiso de los padres es de 16 años para los niños y 15 para las niñas. El matrimonio resultó común entre las mujeres de 18 años.

Según UNICEF, el 10% de las niñas ya estaban casadas para los 15 años y el 37 por ciento a los 18 años. El gobierno no realizó programas de prevención o de mitigación. Las jóvenes a menudo se casaban con hombres mayores. El matrimonio infantil se produjo con mayor frecuencia entre las niñas con bajos niveles educativos, pobres, y que residían en áreas rurales.

Explotación Sexual de Niños: La ley define el estupro como el tener relaciones sexuales con cualquier persona menor de 18 años. Las penas por estupro son de 10 a 20 años de prisión, y multas de 100,000 a 200,000 pesos (U\$2,210 a U\$4,420). La ley también contiene disposiciones específicas que prohíben la pornografía infantil y prostitución, y prescribe penas de 20 a 30 años por el abuso sexual de niños, prisión y multas de 100,000 a 200,000 pesos (entre U\$2,210 y U\$4,420).

Con frecuencia, la prensa reportó sobre varios casos de pedofilia. La explotación sexual comercial de los niños se produjo generalmente en lugares turísticos y en las principales zonas urbanas. El gobierno llevó a cabo programas para combatir la explotación sexual de menores, incluyendo el programa "Casa a Casa" con UNICEF con el objetivo de educar a los grupos sobre la explotación sexual infantil.

Niños Desplazados: Una gran población de menores, principalmente haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana, vivían en las calles (ver Sección 2.d.). Hubo informes de víctimas de la trata de niños haitianos (véase el informe del Informe de Trata de Personas en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/).

Secuestros Internacionales de Niños: El país es parte de la Convención de la Haya de 1980 sobre la Sustracción Internacional de Menores. Consulte el Informe Anual sobre la Sustracción Internacional de Menores del Departamento de Estado en Travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html.

Antisemitismo

La comunidad judía está conformada por aproximadamente 350 personas. No hubo informes de actos antisemitas.

Trata de Personas

Véase el Informe del Departamento de Estado sobre la Trata de Personas en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

Personas con Discapacidades

Aunque la ley prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales, estas personas fueron discriminadas por el sector laboral, educativo, judicial y en la obtención de servicios de salud y de transporte. La ley prevé el acceso físico de personas con discapacidad a todos los nuevos edificios públicos y privados, y el acceso a los servicios básicos. La ley también especifica que cada ministerio debe colaborar con la Comisión Nacional de Discapacidad para aplicar estas disposiciones. Aunque las autoridades trabajaron en este sentido, persistió la brecha en su aplicación. Muy pocos edificios públicos eran totalmente accesibles. La Red Iberoamericana de Personas con Discapacidad Física informó que muchos estudiantes que usan sillas de ruedas no pudieron acceder a las aulas debido a la estrechez de las entradas y la falta de rampas.

La Asociación Dominicana de Rehabilitación recibió el apoyo del Ministerio de Salud Pública y de la Oficina de la Presidencia para proporcionar servicios de rehabilitación a personas con discapacidades físicas y de aprendizaje, así como para dirigir escuelas para niños con discapacidades físicas y mentales. La falta de transporte público accesible para las personas con discapacidad sigue siendo un impedimento para la movilidad de estas personas.

La ley establece que el gobierno debe proveer a las personas con discapacidad acceso al mercado laboral, así como a las actividades culturales, recreativas y religiosa, aunque no

fue aplicada de manera consistente. El Centro de Atención Integral para la Discapacidad, en Santo Domingo, sigue siendo la única institución que ofrece apoyo a los niños con discapacidad. En mayo, el Ministerio de Educación informó que el 80 por ciento de los estudiantes con discapacidades estaban inscritos en las escuelas.

Minorías Nacionales/Raciales/Etnicas

Hubo evidencia de prejuicios raciales y de discriminación contra las personas de tez oscura, pero el gobierno negó que existiera tal prejuicio o discriminación y, en consecuencia, hizo poco para resolver el problema. El prejuicio contra los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, así como otros extranjeros de tez oscura fue una desventaja. La sociedad civil y las organizaciones internacionales informaron que funcionarios negaron servicios de atención médica y la documentación a personas de ascendencia haitiana. Las ONGs locales reportaron incidentes donde a las personas de piel más oscura se les negó el acceso o los servicios bancarios, en los restaurantes y en clubes nocturnos, registro en escuelas privadas y en el registro de nacimientos en hospitales. Las oportunidades económicas también se negaron a las personas de piel más oscura, basándose en el requisito cultural de una “buena presencia”.

Actos de Violencia, Discriminación y Otros Abusos Basados en la Orientación Sexual e Identidad de Género

El tratamiento de lesbianas, *gays*, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) oscila entre la tolerancia ambivalente hasta la homofobia resoluta. Ninguna ley específica protege a los individuos contra la discriminación basada en la orientación sexual o en la identidad de género. La Constitución establece que el Estado promoverá el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer; Sin embargo, no define el matrimonio exclusivamente entre un hombre y una mujer. La ley no extiende los mismos derechos a las parejas de personas del mismo sexo que cohabitan como se las ofrece a las parejas heterosexuales que cohabitan. La ley prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género solamente en aquellas políticas relacionadas con el desarrollo de jóvenes.

Las ONGs denunciaron discriminación generalizada contra las personas LGBTI, transexuales y lesbianas en áreas como la salud, la educación, la justicia y el empleo. Las personas LGBTI enfrentan a menudo intimidación y acoso. Aunque la sociedad civil realizó numerosos talleres para crear consciencia y cambiar las percepciones públicas negativas, encuestas realizadas por el Barómetro de las Américas y el Latino barómetro mostraron enfoques divididos en relación con los derechos humanos de las personas LGBTI, con una pequeña mayoría que desfavorecía el proteger a esta comunidad contra la discriminación. Una encuesta Gallup de 2014 reveló que un 73% de las personas

encuestadas confirmaron la discriminación social contra la comunidad LGBTI. Los líderes religiosos de la iglesias Católica y Evangélicas con frecuencia criticaron a los actividades LGBTI y a las organizaciones internacionales que promovían los derechos humanos de las personas LGBTI, a veces utilizando términos despectivos e insultos contra personas o activistas prominentes de la comunidad LGBTI. En anticipación de las elecciones generales de mayo, las iglesias Católica y Evangélicas publicaron listas de candidatos que apoyaron los derechos humanos de la comunidad LGBTI y recomendaron no votar por esos candidatos. En las elecciones de 2016 se presentó por vez primera un candidato abiertamente gay. El principal candidato de la oposición para la presidencia públicamente declaró que era tolerante de todas las preferencias sexuales. En mayo, durante la Asamblea General de la OEA en Santo Domingo, miles de personas se reunieron fuera del local donde se celebraba la reunión para protestar la supuesta agenda de la OEA de promover los derechos humanos de las personas LGBTI.

Las ONGs reportaron el abuso policial, incluyendo los arrestos arbitrarios, violencia policial y extorsión, contra los miembros de la comunidad LGBTI. También reportaron que las personas LGBTI eran renuentes a presentar cargos formales o quejas por miedo a represalias o humillación. Una ONG que trabaja con los derechos de la comunidad LGBTI reportó 36 crímenes de odio contra la comunidad LGBTI al mes de agosto. En junio, hubo informes de esfuerzos realizados por la policía para dispersar encuentros entre miembros de la comunidad LGBTI en Santiago. El 17 de julio, nueve miembros de la comunidad LGBTI fueron arrestados en el Parque Colón. Los arrestados alegaron que sufrieron otras formas de humillación y abusos. La Oficina del Procurador intervino luego de que los nueve fueron detenidos sin causa alguna por un periodo de 24 horas y ordenó su puesta en libertad. El 2 de octubre, la policía arrestó un grupo de 15 en el Parque Duarte en Santo Domingo, otro punto de reunión de la comunidad LGBTI. De nuevo, no se presentaron causas justificadas para el arresto, y todas las personas fueron puestas en libertad durante un periodo de 24 horas. En ambos incidentes la Policía Nacional y la Oficina del Procurador anunciaron que se realizarían investigaciones, pero ningunos cargos se presentaron por el resultado de estas investigaciones.

Los miembros de la comunidad LGBTI con frecuencia se reunían en espacios públicos. Las reuniones formales generalmente requerían de la aprobación de la Junta de Vecinos, influenciada por la Iglesia Católica, y sus puntos de vista conservadores sobre la comunidad LGBTI. El 3 de julio, por sexto año consecutivo, la comunidad LGBTI celebró el desfile de orgullo gay y un concierto de solidaridad.

El VIH y el SIDA como Estigma social

El Consejo Nacional para el VIH/SIDA informó que 68,000 personas o un 0.8 por ciento de la población total era portadora del VIH o SIDA. El Consejo informó además que el 18 por ciento de la población transgénero era portadora del VIH o SIDA. Las personas con VIH/SIDA confrontaron discriminación, especialmente en el lugar de trabajo.

Las personas con VIH/SIDA se enfrentan, de manera sistemática, a discriminaciones en el acceso a empleos. Las ONGs informaron que los trabajadores del área de salud discriminaban contra pacientes con VIH/SIDA, impidiéndoles acceso a las pruebas contra el VIH/SIDA o a los servicios preventivos y a su tratamiento. Aunque la ley prohíbe someter a estas pruebas para la contratación laboral, las organizaciones Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) informaron que los trabajadores en varias industrias fueron sometidos a pruebas obligatorias para detectar el VIH. A veces los trabajadores eran sometidos a dichas pruebas sin su conocimiento o consentimiento. Muchos trabajadores portadores de la enfermedad no fueron contratados y los que eran empleados fueron despedidos de sus puestos de trabajo o se les negó atención adecuada de salud. Según el Consejo Nacional para el VIH/SIDA informó que las personas con VIH o SIDA no estaban cubiertas por el sistema de seguridad social del país. El municipio de Boca Chica aprobó en junio una resolución que prohíbe la discriminación basada en el VIH o el SIDA, pero dejó secciones basadas en la discriminación por la orientación sexual.

El Consejo Presidencial para el SIDA y VIH, que incluye a los sectores público y privado y a personas con el VIH, coordinaron políticas a nivel nacional y cooperaron con ONGs locales para reducir el impacto del VIH/SIDA en las poblaciones vulnerables y en la sociedad. El Ministerio de Salud también financió a diversas ONGs y a las organizaciones privadas, como el Centro de Orientación e Integración, el cual trabajó para combatir la discriminación y ayudar con la integración de personas en la sociedad.

Otros Actos de Violencia o Discriminación Social

En varias ocasiones, los ciudadanos atacaron y a veces mataron a supuestos criminales que participaron en robos, tomando la ley en sus propias manos. Un importante diario publicó una serie de reportajes que detallaban esta tendencia de ataques realizados por ciudadanos, revelando la muerte de 64 personas asesinadas entre 2013 y 2015 por ciudadanos que aplicaban la justicia popular. Los observadores atribuyeron estos incidentes al aumento de la delincuencia y la percepción de la incapacidad de las fuerzas de seguridad de controlar o combatir el crimen.

Sección 7. Derechos de los Trabajadores

a. Libertad Sindical y el Derecho a la Negociación Colectiva

La ley prevé el derecho de los trabajadores, con excepción de los miembros de la policía, para participar y unirse a sindicatos independientes, llevar a cabo huelgas legales, y negociar de manera colectiva. Sin embargo, la ley impone varias restricciones a estos derechos. Por ejemplo, una exigencia considerada excesiva por la OIT es restringir los derechos sindicales al demandar que los sindicatos representen el 50 por ciento más uno de los trabajadores en una empresa para la negociación colectiva. Además, la ley prohíbe las huelgas hasta que se hayan cumplido los requisitos de mediación. Los requisitos formales para una huelga legal también incluye el apoyo de la mayoría absoluta de todos los trabajadores a favor de la huelga, la notificación por escrito al Ministerio de Trabajo y un periodo de espera de 10 días antes de proceder a la huelga. Los empleados públicos y el personal básico del servicio público no pueden participar en huelgas.

La ley prohíbe la discriminación sindical y prohíbe a los empleadores despedir a un empleado por participar en actividades sindicales, incluyendo ser parte de un comité que busca formar un sindicato. Aunque la ley exige que el Ministerio de Trabajo registre los sindicatos para que sean legales, se prevé el reconocimiento automático de un sindicato si el Ministerio no ha actuado en torno a la solicitud dentro de los 30 días.

La ley le permite a los sindicatos realizar sus actividades sin interferencia del gobierno. Los empleados del sector público pueden formar asociaciones registradas a través de la Oficina de la Administración Pública. La ley exige que el 40 por ciento de los empleados públicos estén de acuerdo para formar un sindicato en una entidad gubernamental. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, la ley se aplica a todos los trabajadores, incluidos las trabajadoras domésticas, las trabajadoras sin documentación legal y los trabajadores de las zonas francas (ZF).

El gobierno aplicó de manera inconsistente las leyes relacionadas con la libertad sindical y la negociación colectiva. Los inspectores laborales no han investigado sistemáticamente las violaciones de la libertad sindical y de los derechos de negociación colectiva. Por ejemplo, los trabajadores del sector azucarero siguieron reportando que los inspectores del sector no le preguntaron a los trabajadores o supervisores sobre la libertad que tenían los trabajadores para asociarse, el derecho a organizarse, la membresía sindical u otra actividad, o la negociación colectiva, aunque los trabajadores reportaron por separado que los amenazaban con despedirlos o con la pérdida de la vivienda si se reunían con los compañeros de trabajo.

Las sanciones penales por prácticas laborales contrarias a la libertad de asociación oscilan entre siete a 12 veces el salario mínimo, y puede aumentar en un 50 por ciento si el empleador repite el acto. El incumplimiento de un convenio colectivo es punible con una

multa de tres a seis veces el salario mínimo. Estas multas fueron insuficientes para disuadir a los empleadores a no violar los derechos de los trabajadores. Además, el proceso para tratar las disputas a través de los tribunales laborales era a menudo largo, con casos pendientes durante varios años. Las ONGs y las federaciones laborales reportaron que las empresas aprovecharon el lenta e ineficaz sistema de apelación, lo que dejó a los trabajadores sin protección de sus derechos provisionales.

Ni el gobierno ni el sector privado respetaron la libertad de asociación ni el derecho a la negociación colectiva. Hubo informes de intimidación, amenazas y chantaje de parte de los empleadores para prevenir la actividad sindical. Algunos sindicatos exigían que los miembros proporcionaran documentación legal para participar en el sindicato, a pesar de que el código laboral protege a todos los trabajadores dentro del territorio, independientemente de su condición jurídica. Los controladores aéreos dominicanos, despedidos por participar en la actividad sindical, presentaron una demanda. La decisión del tribunal ordenó la reinstalación de los controladores y su apelación fue anulada.

Las ONGs enfocadas en temas laborales informaron que la mayoría de las empresas se resistieron a la negociación colectiva y a las actividades sindicales. Según informes, las empresas despidieron a los trabajadores por actividades a favor de los sindicatos y colocó en la lista negra a los sindicalistas, entre otras prácticas antisindicales.

Los trabajadores con frecuencia tenían que firmar documentos donde se comprometían a abstenerse de participar en actividades sindicales. Las empresas también crearon y apoyaron los sindicatos “amarillos” para contrarrestar los sindicatos libres y democráticos. Aunque se organizaron huelgas formales, estas no eran comunes.

Las empresas utilizaron contratos a corto plazo y las subcontrataciones, lo que hizo que la organización y la negociación colectiva mucho más difícil. Pocas empresas tenían pactos de negociación, en parte porque las empresas crearon obstáculos para la formación de sindicatos y podían darse el lujo de pasar por largos procesos judiciales que los sindicatos recién creados no podrían pagar.

La Federación Dominicana de Trabajadores de Zona Franca (FEDOTRAZONAS) informó que la gestión de varias empresas o sus subcontratistas realizaron campañas antisindicales dentro de sus empresas, que incluía amenazas a miembros del sindicato y participaron en actividades para prevenir la participación de los obreros para bloquear la posibilidad de establecer los derechos de negociación colectiva bajo el código laboral. El Ministerio de Trabajo intervino en algunos casos, ofreciendo mediación.

Los sindicatos de las zonas francas informaron que sus miembros no se atrevieron a discutir sobre la actividad sindical en el trabajo por temor a perder sus trabajos. Los sindicatos

acusaron a algunas empresas de despedir a los trabajadores que intentaban organizar los sindicatos.

Las ONGs continuaron informando que muchos trabajadores haitianos y dominicanos de descendencia haitiana en la industria de la construcción y la agricultura, incluyendo el sector azucarero, no podían ejercer sus derechos por miedo al despido o a la deportación. El Ministerio de Trabajo informó que durante el primer semestre de 2014 hubo 237,843 haitianos residiendo en el país, de los cuales 157,562 estaban trabajando en los sectores formal e informal de la economía. Varios sindicatos representaron a los haitianos que trabajaban dentro del sector. Sin embargo, estos sindicatos no fueron influyentes. El Ministerio también declaró que los haitianos obtuvieron, en promedio, el 60 por ciento de lo que un trabajador dominicano recibe como salario.

b. Prohibición del Trabajo Forzoso u Obligatorio

La ley prohíbe todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. La ley prescribe penas por condena de trabajos forzosos de hasta 20 años de prisión con multas. Estas sanciones eran suficientemente estrictas para disuadir los abusos.

El gobierno informó que no recibió reclamos de trabajo forzoso durante el año. Sin embargo, hubo informes creíbles de trabajo forzado de adultos en los sectores de servicio, construcción y sectores agrícolas, así como informes de trabajo forzoso de niños (véase Sección 7.c). Por ejemplo, los trabajadores y sindicatos informaron casos de la imposición de horas extras, endeudamiento inducido, engaños, falsas promesas sobre los términos de trabajo, y la retención y el no pago de los salarios en la construcción y la agricultura, incluyendo el sector azucarero.

La falta de documentación y el estatus legal de los trabajadores haitianos en el país los hizo vulnerables ante el trabajo forzoso. Aunque los datos específicos sobre el problema eran limitados, según informes, los nacionales haitianos fueron sometidos a trabajos forzados en los sectores de servicio, construcción y los sectores agrícolas. Muchos de los 240,000 migrantes irregulares en el país, en su mayor parte haitianos, recibieron una residencia legal temporal (de uno o dos años) a través del Plan de Regularización de Extranjeros dentro de esos sectores. En el 2015 y 2016, el gobierno creó el marco regulador para incluir a los migrantes documentados en la seguridad social, incluyendo la discapacidad, la atención médica y los beneficios de jubilación. A partir de noviembre el gobierno no había comenzado a proporcionar estos beneficios.

Véase también el Informe del Departamento de Estado sobre la Trata de Personas en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt.

c. Prohibición del Trabajo Infantil y la Edad Mínima para el Empleo

La ley prohíbe el empleo de niños menores de 14 años y restringe el empleo de niños menores de 16 años, limitando sus horas de trabajo a seis horas por día. Para los menores de 18 años, la ley limita el trabajo nocturno y prohíbe el empleo en los trabajos peligrosos, como el trabajo con sustancias peligrosas, maquinarias pesadas o peligrosas, y carga pesada. La ley también prohíbe a los menores vender alcohol, realizar ciertos trabajos en la industria hotelera, la manipulación de cadáveres y las diversas tareas relacionadas con la producción de la caña de azúcar, tales como plantar, cortar, transportar y pesar la caña de azúcar, o manejar el bagazo. Las empresas que emplean menores de edad están sujetas a multas y sanciones.

El Ministerio de Trabajo, en coordinación con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), es responsable de hacer cumplir las leyes del trabajo infantil. Mientras que el Ministerio y CONANI efectivamente aplicaron las regulaciones en el sector formal. Sin embargo, el trabajo infantil fue un problema en el sector informal. La ley dispone sanciones por las violaciones del trabajo infantil, incluyendo multas y penas de prisión.

Un Comité Nacional Contra el Trabajo Infantil trabajó para eliminar las peores formas de trabajo infantil estableciendo objetivos, identificando prioridades y asignando responsabilidad para combatir el trabajo y la explotación infantil. Varios programas gubernamentales se concentraron en la prevención del trabajo infantil en la producción de café, tomate y arroz; ventas callejeras; trabajo doméstico; y la explotación sexual comercial.

El gobierno siguió ejecutando un proyecto con la OIT para retirar 100,000 niños y adolescentes del trabajo explotador como parte de su Hoja de Ruta para la Eliminación del Trabajo Infantil. La Hoja de Ruta apuntaba a eliminar las peores formas del trabajo infantil en el país, y todos los demás tipos de trabajo infantil para el 2020.

Sin embargo, el trabajo infantil sigue siendo un problema. Una encuesta de salud publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas reveló que el 12.8% de los menores entre las edades de cinco y 17 años realizaron algún tipo de trabajo infantil ilegal.

El trabajo infantil se produjo principalmente en la economía informal, en las pequeñas empresas, en los hogares, y en el sector agrícola. En particular, se informó que los niños estaban trabajando en la producción de ajo, papas, café, caña de azúcar, tomates y arroz.

Los niños a menudo acompañaban a sus padres a trabajar en los campos agrícolas. Las ONGs también reportaron que muchos niños trabajaban en el sector servicios en una serie de trabajos como trabajadores domésticos, vendedores de calle y mendigos, zapateros, y lavadores de cristales de automóviles. La explotación sexual comercial de los niños sigue siendo un problema, especialmente en las zonas turísticas populares y en las áreas urbanas (ver Sección 6, Niños).

Muchas menores que trabajaban como empleadas domésticas eran víctimas de trabajos forzados. Se presentaron informes creíbles de que las familias pobres haitianas arreglaban para que familias dominicanas “adoptaran” a sus hijos. En algunos casos, los padres adoptivos no trataban a los niños como miembros de la familia, exigiendo que trabajaran en los hogares o empresas familiares en vez de asistir a la escuela, lo que provocó un sistema parecido a una servidumbre pagada para niños y adolescentes. También se informó sobre el trabajo forzoso de niños en las ventas ambulantes y en la mendicidad, la agricultura, la construcción y en el traslado de narcóticos ilícitos.

Véase también los resultados del Departamento de Trabajo Hallazgos Sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil en www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings.

d. Discriminación con respecto al empleo ya la ocupación

La ley prohíbe todas las formas de discriminación, exclusión o preferencia en el área laboral basado en el género, edad, idioma, raza, color, nacionalidad, origen social, discapacidad, afiliación política o sindical, creencias religiosas y contra las personas con el VIH/SIDA. No existe ninguna ley contra la discriminación en el empleo basada en la orientación sexual.

El gobierno no aplicó efectivamente las leyes contra la discriminación en el área laboral. La discriminación en el empleo y la ocupación se produjo con personas LGBTI, especialmente contra las personas transgénero; contra el VIH/SIDA; y contra personas con discapacidad, personas con tez oscura y contra la mujer (ver Sección 6). Por ejemplo, la OIT expresó su preocupación en relación con el acoso sexual en el lugar de trabajo e instó al gobierno a tomar medidas concretas para abordar los estereotipos sociales y culturales existentes que contribuyen con la discriminación. La discriminación contra los trabajadores migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana se produjeron en todos los sectores. Muchos inmigrantes irregulares haitianos no tuvieron acceso a los beneficios, incluyendo la seguridad social y acceso a los servicios de salud (véase Secciones 7.b. Y 7.e.).

En agosto de 2015 el Ministerio de Trabajo anunció una campaña contra la discriminación laboral titulada “Trabajemos todos desde la igualdad”. El programa le proporcionó apoyo a los grupos vulnerables, incluyendo a las personas con discapacidad, las mujeres, aquellos con una orientación sexual diferente, y personas con VIH/SIDA.

e. Condiciones Aceptables de Trabajo

Hay 14 salarios mínimos diferentes, dependiendo de la industria. El salario mínimo de los trabajadores de las zonas francas era de \$8,310 pesos (U\$183) al mes. El salario mínimo para los trabajadores fuera de las zonas osciló entre \$7,843 pesos (U\$173) a 12,873 pesos (U\$284) al mes. El salario mínimo para el sector público es de \$5,884 pesos (U\$130) al mes. El salario mínimo diario para los trabajadores agrícolas fue de \$234 pesos (U\$5.17), basado en un día de 10 horas, con la excepción de la industria azucarera. Los trabajadores agrícolas recibieron \$146 pesos (U\$3.22), basado en una jornada laboral de ocho horas. Las disposiciones relativas al salario mínimo abarcan a todos los trabajadores, incluidos los migrantes. El Banco Central calculó que debido a la inflación el salario mínimo no había aumentado en términos reales desde 1979. El Consorcio de los Derechos de los Trabajadores y las confederaciones laborales estimaron que el salario digno era de \$27,897 pesos (U\$616) por mes.

En el 2012, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo utilizó estadísticas de 2007 para calcular la línea oficial de pobreza y ubicarla en \$3,247 pesos (U\$72) al mes. El Ministerio declaró que el 43 por ciento de la población vivía en la pobreza.

En febrero de 2015, la Fundación Juan Bosch publicó un estudio que reportó que el 63 por ciento de los dominicanos no recibieron ingresos suficientes para pagar por el menor de los presupuestos para una familia y que sólo el 3.4 por ciento recibió un salario adecuado para cubrir los gastos de una familia conformada por cuatro personas. El informe señala que el 80 por ciento de los trabajadores ganan menos de \$20,000 pesos (U\$454) por mes.

En agosto de 2015, la Comisión Nacional de Salarios aprobó un salario de 15.5 por ciento para los trabajadores de la construcción. El Ministerio de Trabajo declaró que dicho aumento beneficiaría a todos los trabajadores de la construcción del país. La Comisión Nacional de Salarios acordó el aumento después de escuchar los argumentos presentados por la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción, así como por representantes del sector privado de la construcción.

El Ministerio de Trabajo, en un acuerdo tripartito con los sindicatos y el sector privado, aprobó un aumento mínimo de un 14 por ciento en mayo de 2015. El último incremento salarial en este sector se produjo en la década de los noventa. Una encuesta aleatoria,

realizada por un diario nacional, demostró que aunque la mayoría de los encuestados aprobaron el incremento, la mayoría declaró que el incremento no mejoraría su bienestar general. Los sindicatos, que buscaban un incremento de un 28 a un 30 por ciento, expresaron su insatisfacción con los resultados del acuerdo tripartito.

La ley establece que la semana laboral estándar sea de 44 horas. Aunque los trabajadores agrícolas están exentos de este límite, en ningún caso la jornada laboral podrá exceder las 10 horas. La ley estipula que todos los trabajadores tengan derecho a 36 horas de descanso ininterrumpido cada semana. Aunque la ley prevé vacaciones anuales pagadas y el pago de horas extras, su aplicación fue ineficaz. La ley prohíbe las horas extraordinarias excesivas u obligatorias y establece que los empleados pueden trabajar un máximo de 80 horas de horas extras durante tres meses. El código laboral abarca a los trabajadores domésticos, pero no cubre las notificaciones ni las indemnizaciones. Los trabajadores domésticos tienen derecho a dos semanas de vacaciones después de un año de trabajo continuo, así como una bonificación de Navidad equitativo a un mes de salario. El código laboral también cubre a los trabajadores de las zonas francas, pero no tienen derecho a las bonificaciones.

El Ministerio de Trabajo establece las normas de seguridad y salud en el lugar de trabajo. La ley indica que los empleadores están obligados a garantizar la seguridad y la salud de los empleados en todas las áreas de trabajo. Por ley, los empleados pueden retirarse de situaciones que ponen en peligro su salud o su seguridad, sin poner en peligro su trabajo. Sin embargo, no lo pudieron poner en práctica sin represalias.

Las autoridades no siempre lograron imponer que se cumpliera con el salario mínimo, las horas de trabajo, y la salud y la seguridad del lugar de trabajo. Las penas por estas violaciones oscilan entre tres y seis veces del salario mínimo. Tanto el Instituto de Seguridad Social como el Ministerio de Trabajo tenían un pequeño cuerpo de inspectores encargados de hacer cumplir las normas laborales. El Ministerio informó en 2015 capacitó a inspectores de trabajo en las áreas de protocolos de inspección y mejores prácticas, y llevó a cabo campañas informativas para los empleados y empleadores que se centraban en los derechos y deberes laborales, la inscripción en la seguridad social, los contratos de trabajo y el trabajo infantil.

Los trabajadores se quejaban de que los inspectores del Ministerio de Trabajo carecían de formación y no respondieron a sus quejas, aunque sí respondieron las inquietudes de los empleadores con mayor prontitud. En el sector del azúcar, por ejemplo, se produjeron informes sobre fallas procesales y metodológicas en las inspecciones del Ministerio, tales como: entrevistas a pocos o a ningún obrero, falta de discusión sobre temas relacionados con el cumplimiento de la ley a favor de los trabajadores, realizar entrevistas en presencia de los representantes de la empresa, contratación de inspectores con pocos conocimientos

de otros idiomas (especialmente el Creole), una traba para una buena comunicación con todos los obreros, y falta de seguimiento en las inspecciones realizadas para verificar y mejorar las denuncias y violaciones identificadas. FEDOTRAZONAS informó que el gobierno no monitoreó con eficacia los temas de seguridad y salud en el lugar de trabajo, y no sancionó las violaciones identificadas.

El trabajo obligatorio de horas extras fue una práctica común en las fábricas, reforzada por la falta de pagos o la pérdida de trabajos para aquellos que rehusaban cumplir con el mandato. FEDOTRAZONAS informó que algunas empresas crearon programas de trabajo “cuatro por cuatro”, en virtud de los cuales los empleados trabajaban turnos de 12 horas durante cuatro días. En algunos casos, los empleados que trabajaron bajo el sistema “cuatro por cuatro” no fueron pagados horas extras en compensación por las horas adicionales trabajadas. Algunas empresas continuaron la práctica de pagar salarios cada ocho días, un salario quincenal con los horarios del sistema “cuatro por cuatro”, en lugar de cada siete días, un salario semanal con un horario estándar de 44 horas. Estas prácticas dieron como resultado el pago insuficiente de los empleados, y no fueron recompensados por las horas extras trabajadas.

Según un informe de la OIT, publicado en el 2014, el empleo informal como parte del empleo no agrícola creció de 50 por ciento en 2011 a 51.5 por ciento en el 2012. En el 2013, el Banco Central calculó que el 58 por ciento del empleo era informal y teorizó que esta alta tasa proviene de un salario mínimo bajo y la elasticidad de la mano de obra por la disponibilidad de una mano de obra migrante barata.

Los trabajadores de la economía informal se enfrentan a condiciones de trabajo más precarias que los trabajadores formales y con frecuencia estaban fuera del alcance de los esfuerzos gubernamentales para aplicar la ley.

Las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas eran pobres. Muchos trabajadores trabajaban largas horas, a veces 12 horas al día y siete días a la semana, y sufrían de condiciones peligrosas de trabajo, incluida la exposición a plaguicidas, largos periodos expuestos al sol y el uso de herramientas afiladas y pesadas. Algunos trabajadores informaron que no recibieron el pago mínimo obligatorio.

Las empresas no se adhirieron regularmente a las normas de seguridad y salud en el lugar de trabajo. Por ejemplo, la Confederación Nacional de Sindicatos reportó condiciones inadecuadas de salud y seguridad, incluida la falta de vestimenta adecuada para realizar el trabajo y los equipos de seguridad. Asimismo, se detectaron vehículos sin bolsas de aire, la ausencia de botiquines de primeros auxilios, el funcionamiento adecuado de ventanas o aire

acondicionado, ventilación inadecuada en los espacios de trabajo, número insuficientes de baños, y áreas inseguras donde comer.

Los accidentes provocaron lesiones y muerte a los trabajadores, pero la información sobre el número de accidentes no estaba disponible a fin de año.

###